

## CRECIMIENTO Y DISTRIBUCION

David Ibarra  
15 de septiembre de 2005

En mi artículo anterior (5 de septiembre) señalé que la desigualdad y la pobreza en México y en casi toda América Latina han sido males endémicos desde la época colonial. A raíz del triunfo de la Revolución Mexicana, parecía que la suerte de los pobres mejoraría. Y en efecto mejoró en grado apreciable entre la década de los treinta y finales de la década de los setenta, aunque la mella en el reparto distributivo fuese menor.

La reforma agraria favoreció a la población rural desposeída; la expropiación petrolera sirvió de muro de contención a intereses foráneos en conflicto con las transformaciones internas; la Segunda Guerra Mundial, las reglas del orden internacional y la política proteccionista de la época, alentaron la industrialización y la transferencia masiva de mano de obra del campo a la ciudad; la política educativa y de protección social recibió un impulso significativo. En suma, durante el período 1930-1950 el producto real se multiplicó 15.5 veces (5.64% por año), la población creció 4 veces, y el ingreso por habitante casi se triplicó (2.75 veces, crecimiento del 2.8% anual). La celeridad en la creación de empleos y el significativo ensanchamiento de la capilaridad social paliaron durante medio siglo los males de la concentración excesiva del ingreso.

Los puntales del llamado milagro mexicano comenzaron a flaquear desde mediados de la década de los setentas. Las ventajas del proteccionismo declinan mientras sus inconvenientes (inflación, inhibición de exportaciones, endeudamiento) se tornan más pronunciados. El péndulo del orden económico

internacional se inclinó hacia el mercado, hacia la abolición del estatismo y de las fronteras. México y América Latina inician en la década de los ochenta las reformas neoliberales frente a la situación crítica creada por la crisis de la deuda y la presión del mundo desarrollado por insertar al mundo a un orden económico y político unificado. No hay vuelta atrás, el pasado es irrecuperable, pero sí hay márgenes de maniobra que no se han sabido aprovechar como lo hacen exitosamente otros países periféricos en Asia y aun dentro de América Latina (Chile, Costa Rica).

La transición se inicia cuando junto a la liberación comercial y financiera, se implantan políticas monetarias y fiscales ortodoxas (restrictivas), desregulación de precios, supresión de subsidios, privatización de empresas públicas. La avalancha resultante de importaciones, los recortes al gasto público, las elevadas tasas de interés, debilitan al mercado interno y a los alicientes a la inversión nacional.

Con utilidades y expectativas disminuidas, el grueso de los empresarios que servían a los mercados locales y las crisis bancarias y financieras, la nueva estrategia poco puede hacer en la movilización de los recursos internos. En su lugar se vuelcan los esfuerzos en procurar la afluencia de inversión extranjera, como vehículo compensador de la insuficiencia de la formación de capital de las empresas y gobiernos. Ese mismo fenómeno contribuye a romper resistencias al proceso de privatización-extanjerización de empresas públicas y privadas.

La conmoción sociopolítica creada por el abrupto reemplazo de las instituciones del proteccionismo por las de los mercados liberados, crea trastornos inevitables que se traducen en interrupción o al menos en reducción de los ritmos históricos de desarrollo. El acrecentamiento del producto por

habitante en México y América Latina entre 1980 y 2003, apenas alcanza en promedio el 1% anual, cuando las cifras del período 1950-1980, triplican ese porcentaje. En 1980, los pobres latinoamericanos sumaban el 40.5% de la población y los indigentes el 18.6%. Contra todos los pronósticos esperanzadores del cambio, dos décadas después las cifras empeoran al 44.0% y al 19.4%, respectivamente. Brasil (30%) y México (17%) acaparan casi la mitad de los pobres latinoamericanos.

Así, se estanca el alivio a la pobreza que aqueja --con fluctuaciones asociadas a recuperaciones y caídas económicas-- al 47% de la población mexicana entre 1984 y 1998. Del mismo modo los indigentes suman alrededor del 18% en dichos años. Después se registra una mejoría atribuible centralmente a las iniciativas de la población rural a diversificar sus trabajos y fuentes de ingreso o a emigrar (los pobres bajan al 39.4% y los indigentes al 12.6% de la población en 2002). Según estimaciones del Banco de México, las remesas de emigrantes suman alrededor de 17-19 mil millones de dólares anuales, puesto en términos comparativos ese monto equivale a poco más del 50% del producto agropecuario de 2004 y a tres veces las importaciones de esos artículos. Es posible que la totalidad de la fuerza de trabajo mexicana en Estados Unidos no tenga origen rural. Aun así, las cifras son de sobra significativas, casi hacen redundante a la agricultura nacional, si no fuese porque ahí se ubica una quinta parte de la fuerza de trabajo.

También han influido positivamente en abatir la pobreza, aunque en menor escala, las políticas microsociales de programas como Progres y Procampo y el reflejo de la recuperación estadounidense. Sin embargo, las políticas macroeconómicas, casi por entero, olvidan los problemas distributivos y

del desarrollo para seguir centradas obsesivamente en combatir la inflación. Sólo en la retórica de los discursos políticos se paga tributo a estas cuestiones.

Más difícil que la pobreza parece resultar el combate a las desigualdades en la distribución del ingreso. En 1989, año de la culminación de la crisis y reinició de la recuperación, el 75% de la población mexicana estaba compuesta por personas con ingresos per cápita inferiores al promedio nacional, en 2002, esa cifra apenas se reduce al 72%. De la misma manera el coeficiente de Gini que mide la concentración del ingreso (el indicador va de 0 a 1, conforme aumenta la desigualdad) se ha mantenido en cifras muy altas (más de 0.5) desde la década de los ochenta.

Las asimetrías en el reparto del ingreso y la pobreza se han convertido en una constante de la vida nacional, apenas atenuada en los períodos de prosperidad. De ahí la conocida conclusión de que tales fenómenos son resultado de las características del sistema social del país, de sus instituciones y de la naturaleza de las políticas públicas, más que ser producto de habilidades individuales, por más que siempre haya personas que destacan en actividades específicas. Ello confirma, de otro lado, el que las instituciones de países igualitarios tienden a reproducir la equidad, mientras que ahí donde prevalecen desigualdades acusadas se tiende a perpetuarlas. La oscura historia distributiva de América Latina comparada con la luminosa de los países escandinavos parecería validar el aserto anterior.

La intensidad y continuidad del desarrollo tiende a reducir directa (vía empleo y capilaridad social) e indirectamente (por la educación, la salud y otros expedientes de fortalecimiento del capital humano) la pobreza. Con todo, los escollos supremos se enfrentan cuando se intenta abatir la concentración de

riqueza e ingresos, por cuanto que esta última se corresponde de modo cercano con la distribución del poder político y económico. A título ilustrativo cabría citar el caso de Chile donde se registran avances sustanciales en la eliminación de la pobreza y logros mucho menores en materia distributiva. Chile está a punto de ser el único país latinoamericano que ha abatido la pobreza conforme a las metas del Milenio de las Naciones Unidas, mientras mantiene una elevadísima concentración del ingreso (Gini de 0.57).

En México, el rezago conceptual en el diseño de las políticas públicas nacionales es manifiesto. Ya hay atraso, incluso frente a los planteamientos conservadores del Primer Mundo. La revisión del Consenso de Washington y las recomendaciones de los organismos financieros internacionales que originalmente tenían marcada orientación de mercado, sin enterarnos, poco a poco cambian de perspectiva. Ya se acepta que los programas de reforma estructural (derivados de la visión económica neoclásica) estaban ayunos del análisis institucional y, por tanto, resultaban no sólo inadecuados en la promoción del desarrollo, sino en ganar legitimidad ciudadana y en aliviar los sacrificios del acomodo transicional.

Tanto el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional ante el deterioro social que se produce en América Latina o Africa, dejan de ver a la pobreza como el producto de los errores de los gobiernos para reconocer también orígenes sistémicos arraigados en la abrupta apertura de mercados. En el *Informe del Desarrollo Mundial 2000-2001*, el Banco Mundial propone multiplicar las oportunidades de los pobres a través de varias acciones: a) fortalecer sus ingresos mediante políticas de mercado y extramercado; b) reducir su extrema vulnerabilidad, perfeccionando las redes de seguridad social; c) acrecentar su poder político a fin de que sus demandas sean oídas; d) permitir que países se

adueñen y formulen sus objetivos y estrategias económicas y sociales, en vez de recibirlos pasivamente del exterior.

El programa destinado a reducir la pobreza y alentar el desarrollo (Poverty Reduction and Growth Facility) del Fondo Monetario Internacional marca el fin de la exclusividad de la meta estabilizadora de precios en cualquier tiempo y lugar, para dar cabida al desarrollo, a la necesaria adaptación de las políticas al ámbito institucional de cada país y al control nacional de las mismas. A regañadientes, las condicionalidades de los organismos internacionales --que obligaban a los países a seguir determinadas conductas-- están siendo sustituidas por apoyos para acrecentar la capacidad de los países pobres para guiar su propia sociedad.

Como se aprecia, el Estado que había sido expulsado de la vida económica, vuelve a ser incorporado. Las relaciones de mercado, en tanto esfera de competencia de actores privados, han de ser tamizadas por relaciones políticas asentadas en una lógica diferente: la acción del Estado y la formación de consensos democráticos. Sería saludable, entonces, revisar de vez en cuando las experiencias de otras latitudes, tanto como la evolución del pensamiento económico y social en el mundo. Ojalá el gobierno entrante pueda ponerse y ponernos al día.